



TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, 04 de julio de 2024

Estimado solicitante
Presente. -

En atención a su solicitud con folio número 251159400004524, realizada a través de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, me permito dar respuesta en tiempo y forma con base a la información proporcionada a esta unidad por el área correspondiente en los siguientes términos:

Con respecto a la información solicitada, en la cual requiere:

*"... solicito información publica de **todo lo actuado** en el expediente 525/2020/II del índice de la sala regional centro del tribunal de justicia administrativa del estado de Sinaloa, donde la actora es Armando Guerrero Barraza".*

En relación a lo anterior, se informa que la respuesta proporcionada por la Sala Regional Zona Centro, área competente de acuerdo al objeto y naturaleza de su solicitud para su debida atención, se encuentra en el archivo anexo, mismo que pongo a su disposición a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Dianet Pérez Castro

Titular de la Unidad de Transparencia

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA



Asunto: Respuesta a la solicitud de acceso a la información 45/UT-TJA/2024

Culiacán, Sinaloa, a tres de julio de dos mil veinticuatro.

Lic. Dianet Pérez Castro.
Titular de la Unidad de Transparencia.

En atención al oficio 45/UT-TJA/2024 de veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, relativo a la solicitud con folio 251148400004524 presentada el veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, en la cual requiere a esta Sala lo siguiente:

"...solicito información publica de todo lo actuado en el expediente 525/2020-II, del indice de la sala regional centro del tribunal de justicia administrativa del estado de Sinaloa, donde la actora es Armando Guerrero Barraza."

A fin de atender el citado requerimiento, en mi carácter de titular de esta Sala Regional Zona Centro manifiesto que se responde la presente solicitud de acceso a información, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., apartado A, fracciones I, III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 1, 2 y 3, fracción VII, 4, 6 y 122 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo, la Ley General); y, 1, 2, 4, 7 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (en adelante, Ley de Transparencia Estatal), en los que se establece que cualquier persona puede requerir acceso a la información que obra en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o posean por cualquier título, ya que en éstos consta el ejercicio de sus facultades, funciones o competencias, así como las actividades de sus servidores públicos o integrantes.

Para tales efectos, en términos de lo previsto en los artículos 129 de la Ley General y 133 de la Ley de Transparencia Estatal, los sujetos obligados cumplen con el deber de otorgar acceso a la información cuando proporcionan los documentos que

SALA REGIONAL ZONA CENTRO
BLVD. ALFONSO ZARAGOZA MAYTORENA, No.1980 NORTE, DESARROLLO URBANO TRES RIOS
CORPORATIVO 120, TORRE C, PRIMER Y SEGUNDO PISO
CULIACÁN, SINALOA.
TEL. Y FAX (667) 750-7308

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA

se encuentran en sus archivos o aquéllos que están obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en el formato que así lo permitan las características de la información o el lugar en el que se encuentren.

En cumplimiento a lo anterior, y en apego a lo establecido en los artículos 131 de la Ley General y 135 de la Ley de Transparencia Estatal, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado debe turnar la solicitud de acceso a todas las áreas competentes que pudieran contar con la información o debieran tenerla, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, con el propósito de que realicen una búsqueda exhaustiva, diligente y razonable de lo requerido.

En este contexto, quien suscribe manifiesta que esta Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, a mi cargo es competente para atender el folio de mérito, toda vez que es una solicitud dirigida directamente a esta dependencia, además, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 6, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, en los que se establece que este órgano constitucional autónomo es competente para resolver de los juicios que se ventilen por las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal que emitan las autoridades, cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares.

Precisado lo anterior, como respuesta a su solicitud, hago de su conocimiento lo siguiente:

En primer término, se hace de su conocimiento que este Tribunal **no forma expedientes en versión pública**, toda vez que no existe disposición legal alguna que lo constriña a ello, no obstante, en cumplimiento al artículo 95, fracción XX y 98, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, únicamente se crean versiones públicas de las sentencias que se emiten en los juicios de nulidad que se siguen ante este Órgano de impartición de justicia.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA

Por lo anterior, como respuesta a su solicitud, hago de su conocimiento que en el siguiente hipervínculo se encuentra la versión pública de la sentencia de tres de noviembre de dos mil veintidós, emitida por la Sala Regional Centro del Tribunal de Justicia Administrativa en el juicio número 525/20-II, interpuesto por Armando Guerrero Barraza:

<https://drive.google.com/file/d/15pLavP-YL-HFHVyGtxmO8L9O4fs5cNCF/view?usp=sharing>

Por último, debe hacerse del conocimiento del solicitante que, conforme a lo dispuesto en los artículos 142 y 143 de la Ley General, así como 170 y 171 de la Ley de Transparencia Estatal, podrá interponer recurso de revisión ante la Comisión, sus Delegaciones o la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, por sí mismo o través de un representante, dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha de la notificación de la respuesta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Edna Liryan Aguilar Olguín.

Magistrada Instructora de la Sala Regional Zona Centro
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.



Culiacán, Sinaloa, **tres noviembre de dos mil veintidós**, vistos los autos del juicio de rubro indicado, y al encontrarse cerrada la instrucción del juicio citado al rubro, con fundamento en los artículos 95 y 96 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, se dicta la sentencia correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

RESULTANDOS

1. Presentación de demanda. El tres de agosto de dos mil veinte, compareció ante esta Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado *** , quien demandó por propio derecho al **Fiscal General del Estado de Sinaloa**, al **Oficial Mayor** y al **Director Jurídico ambos adscritos a la citada fiscalía**, la nulidad de los oficios *** y ***, de veintinueve de febrero de dos mil veinte y dos de marzo de dos mil veinte respectivamente, mediante los cuales se determinó no otórgale la pensión por retiro anticipado, así como de diversas prestaciones.

2. Aclaración de demanda. Mediante proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, se mandó aclarar la demanda de conformidad con el artículo 56 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, por los actos atribuidos al **Secretario de Administración y Finanzas y Director de Recursos Humanos ambos adscritos a la citada fiscalía**.

En virtud, de que no especifica si el acto impugnado lo constituye una omisión o una negativa expresa en los pagos señalados, por lo que se le otorgo un término señalado en dicho proveído para subsanar dicha irregularidad apercibida de no hacer se le tendría por no interpuesta la demanda con respecto a los actos antes señaladas.

3. Admisión parcial de la demanda. El nueve de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por admitida parcialmente la demanda solo por los actos atribuidos a las **Fiscal General del Estado de Sinaloa**, al **Oficial Mayor** y al **Director Jurídico ambos adscritos a la citada fiscalía**, esto debido a que la parte actora no subsanó eficientemente la aclaración antes mencionada, asimismo se ordenó emplazar a las autoridades antes mencionadas para que produjeran contestación a la misma.

4. Contestación. Mediante acuerdo del Treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se tuvo por contestada la presente demanda.

5. Alegatos y cierre de instrucción. El once de mayo de dos mil veintidós, se concedió término a las partes para que formularan sus alegatos, y una vez transcurrido dicho término, por auto de fecha en que se actúa, se declaró cerrada la instrucción del presente juicio; y,

CONSIDERANDOS

Primero. Competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer de la demanda de nulidad, con fundamento en los artículos 116, fracción V, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, primer párrafo, 6, fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X y 16, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; 24 y 26 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.

Segundo. Precisión del acto impugnado. Lo constituye la nulidad del oficio 0795 de veintinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el **Director Jurídico**, así como del oficio [REDACTED] de dos de marzo de dos mil veinte, emitido por el **Oficial Mayor, ambos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa**, mediante los cuales Dictaminaron como no procedente la jubilación por retiro anticipado de *** , el cual aduce tener derecho a un ochenta y cinco por ciento al salario que devenga, así como diversas prestaciones que derivan del mismo.

Tercero. Estudio de la legalidad de la resolución administrativa impugnada. Una vez precisado el acto impugnado y al no advertir del sumario que nos ocupa, la actualización de alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 93 y 94 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, respectivamente, cuyo análisis aun oficioso establecen el primero de los numerales citados parte final y 96, fracción II del citado ordenamiento legal; esta Sala habrá de pronunciarse con el estudio de los puntos controvertidos en observancia de lo estatuido por la fracción III de éste último precepto legal.

Bajo ese contexto, se tiene que la parte actora aduce en su capítulo de hechos que ingresó a laborar con categoría de personal de honorarios el

seis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, a la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.

A su vez, menciona que cambió de categoría a Agente del Ministerio Público del Fuero Común, titular "A", adscrito actualmente a la Vice fiscalía Regional Zona Centro y que percibe como salario mensual un total de \$ [REDACTED].

Además, narra que el quince de enero de dos mil veinte, solicitó al Fiscal General del Estado de Sinaloa, que le otorgue la pensión jubilación por retiro anticipado, por un equivalente al ochenta y cinco por ciento del salario que devenga; esto en virtud de que cuenta con una edad de cuarenta y ocho años de edad y veintidós años de servicio.

Luego, que mediante oficio [REDACTED] de dos de marzo de dos mil veinte, el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, le informó que el Director General Jurídico de dicha Fiscalía, mediante oficio [REDACTED] de veintinueve de febrero de dos mil veinte, dictaminó no procedente la solicitud de retiro anticipado.

Por lo que, concluye en sus conceptos de nulidad, que el acto carece de debida fundamentación y motivación con lo previsto por el artículo 14 y 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que considera que sí acreditó ser integrante de una corporación policial de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en virtud de que de las documentales públicas que allegó en su solicitud de otorgamiento de pensión de retiro anticipado, se desprende que prestó sus servicios como Agente de Ministerio Público "A" adscrito a la Vicefiscalía Regional Zona Centro.

Bajo esa óptica, la parte actora menciona que sí forma parte de una corporación policial, tal y como lo contempla el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 1, 3, 5 fracción VIII y IX de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 1,2, fracciones VI y VII, 4, fracción II y 19 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Por último, expone que dicha resolución trasgrede el principio pro-persona previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la autoridad demandada debió aplicarle la ley más beneficiosa, es decir, los artículos 35 y 40 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

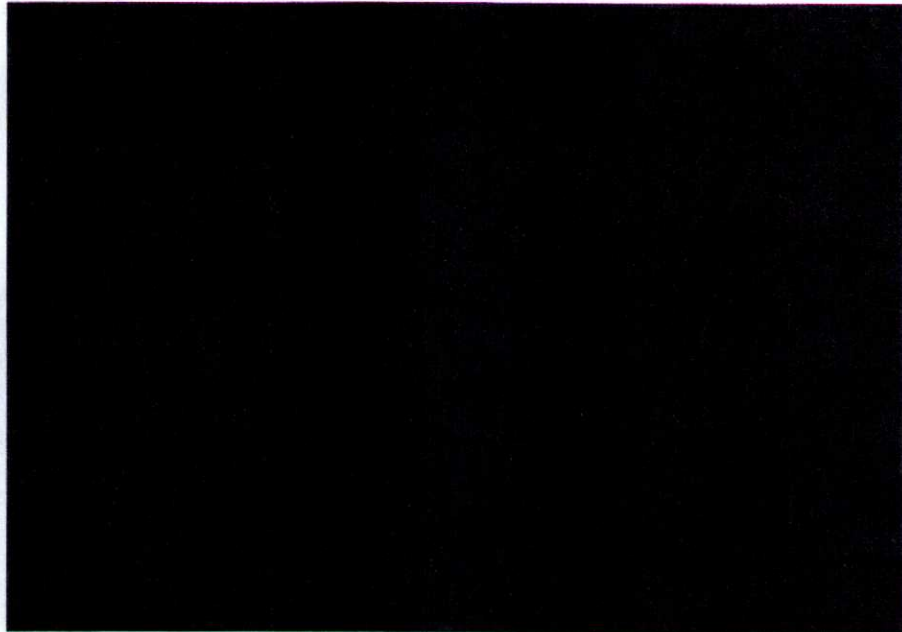
En contra sentido, las autoridades demandadas arguyen que los conceptos de nulidad vertidos por la parte actora son infundados, en virtud de que los actos impugnados, se encuentran debidamente fundamentados, en razón de que se dictamina que no procede su solicitud de pensión por no acreditar ser integrante de alguna corporación policial de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Seguridad Publica de Estado de Sinaloa.

En suma, continúa en sus argumentaciones que de las constancias allegadas por la parte actora se desprende, específicamente, de sus recibos de pago que se le descuenta el concepto de "cuota IPES", lo cual, de un razonamiento lógico, el accionante cotiza de conformidad con la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, por ende le corresponde jubilarse conforme a dicho ordenamiento.

Ahora bien, a juicio de esta Sala los argumentos hechos valer por la parte actora devienen **fundados**, con base en las consideraciones lógico-jurídicas que a continuación se exponen:

Esta Juzgadora procede en primer término, al análisis del contenido de las resoluciones impugnadas, las cuales obran agregadas en autos en hojas veintinueve y treinta, mismas que se digitalizan para su análisis en los términos siguientes:





De lo anterior se abstrae, que en dichas resoluciones las autoridades demandadas resolvieron que no procede otorgar la pensión por retiro anticipado solicitada por la parte actora, en virtud de que no acreditó ser integrante de la corporación policial de dicha institución, y funda su actuar de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

En ese contexto, se tiene que la Litis a dilucidar en presente asunto, es sí con motivo de la categoría que ostenta el accionante le corresponde o tiene derecho a la pensión por retiro anticipado solicitada.

Ahora bien, resulta necesario traer a colación el contenido de los dispositivos legales en que la parte actora y la autoridad demandada basan sus argumentos y excepciones, a saber, los artículos 2, fracciones VI y VII; 35, 38, 40 y 42, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, respectivamente los cuales son del tenor literal siguiente:

"Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: (...)

VI. Instituciones de Procuración de Justicia: Al Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquel;

VII. Instituciones de Seguridad Pública: A las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, el Sistema Penitenciario, de seguimiento, y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel estatal y municipal;

VIII. Instituciones policiales: A los cuerpos de policías estatales y municipales, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de justicia para adolescentes, de detención preventiva, de tribunales de barandilla; y en general, todas las dependencias, grupos y unidades especializadas encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal que realicen funciones similares;

(...)." .

"Artículo 35.- Los integrantes de las corporaciones policiales estatales y municipales de seguridad pública o sus beneficiarios en su caso, tendrán derecho al otorgamiento de pensiones por retiro, retiro anticipado, invalidez, vejez, orfandad y muerte.

De igual forma, a los elementos de las corporaciones policiales estatales y municipales de seguridad pública se les garantizará un sistema de retiro digno y se establecerá en su beneficio un sistema de seguros para sus familiares, aplicables en caso de su fallecimiento o la incapacidad total permanente, acaecidas, según el caso, en el cumplimiento de sus funciones o como consecuencia de su condición laboral."

"Artículo 40.- Tienen derecho a la pensión por retiro anticipado quienes habiendo cumplido cuarenta y cinco años de edad, tuviesen cuando menos quince años de servicio. Para tal efecto, la pensión por retiro anticipado dará derecho al pago de una cantidad equivalente del salario que estén devengando, de conformidad con los años de servicio y el porcentaje fijado en la tabla contenida en el artículo 42.

Artículo 42.- El monto de las pensiones por retiro anticipado, se fijará de conformidad con la siguiente tabla de porcentajes:

15 años de servicio	50%
16 años de servicio	55%
17 años de servicio	60%
18 años de servicio	65%
19 años de servicio	70%
20 años de servicio	75%
21 años de servicio	80%
22 años de servicio	85%
23 años de servicio	90%
24 años de servicio	95%

(El resaltado es de la Sala).

De los dispositivos legales antes reproducidos se desprende que para efectos de dicha Ley, se entiende por **Instituciones de Procuración de Justicia, al Ministerio Público**, los servicios periciales y demás auxiliares de aquel; por **Instituciones de Seguridad Pública**, a las Instituciones Policiales, **de Procuración de Justicia**, el Sistema Penitenciario, de seguimiento, y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel

estatal y municipal; y por Instituciones policiales, a los cuerpos de policías estatales y municipales, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de justicia para adolescentes, de detención preventiva, de tribunales de barandilla; y en general, todas las dependencias, grupos y unidades especializadas encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal que realicen funciones similares.

Asimismo, que **los integrantes de las corporaciones policiales estatales y municipales de seguridad pública** o sus beneficiarios en su caso, **tendrán derecho al otorgamiento** de pensiones por retiro, **retiro anticipado**, invalidez, vejez, orfandad y muerte; y que a los elementos de las corporaciones policiales estatales y municipales de seguridad pública se les garantizará un sistema de retiro digno y se establecerá en su beneficio un sistema de seguros para sus familiares, aplicables en caso de su fallecimiento o la incapacidad total permanente, acaecidas, según el caso, en el cumplimiento de sus funciones o como consecuencia de su condición laboral.

Por último, que tienen derecho a la pensión por retiro anticipado, quienes tengan cuarenta y cinco años de edad, y cuando menos quince años de servicio, lo cual dará derecho al pago de una cantidad equivalente del salario que estén devengando, de conformidad con los años de servicio y el porcentaje fijado en la tabla contenida en el artículo 42.

De la disposición citada anteriormente se desprende que el monto de las pensiones por retiro anticipado se fijará de conformidad con la tabla de porcentajes referida.

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la ley referida, por veintiún años de servicio, le correspondería a la actora el pago de la pensión por el ochenta por ciento del sueldo que percibía al momento de que se generó su derecho.

Ahora bien, tenemos que la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, establece lo siguiente:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

(...)

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

(...)

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, **Agentes del Ministerio Público**, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

Los Agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

(...)."

Ahora bien, por su parte el artículo 3º, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece lo siguiente:

"Artículo 3.- La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley."

Con base en lo anterior esta Sala considera que, como se colige del último de los preceptos legales reproducidos, la función de seguridad pública se lleva a cabo en los diversos ámbitos competenciales, por las instituciones de **procuración de justicia**, dentro de las cuales, según el contenido del supra citado numeral 2º, fracción VI, de la Ley Seguridad Estatal, se encuentran los **Agentes del Ministerio Público**, por lo que se entiende que éstas coadyuvan en su actividad de forma conjunta con las instituciones policiales.

Por otra parte tenemos que el constituyente incluyó en el régimen especial establecido en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Carta Magna, a los **Agentes del Ministerio Público**, por lo que para cumplir con los objetivos de la seguridad pública, éstos deben participar en los procesos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, lo que conlleva a que el Estado esté en posibilidad de separarlos del cargo en caso de no cumplir con los requisitos de dichos procesos, en el entendido que de ser así, y aún en caso de haber sido injustificada tal separación, en ningún caso procederá su reinstalación, sino que éstos solo tendrán derecho a una indemnización.

En ese orden de ideas, tenemos que el legislador considera que la función de los servidores públicos mencionados en la fracción XIII de apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incide en la defensa de la seguridad pública, y por ello es que los incluye de manera expresa y nominalmente en dicha porción normativa, por lo que es inconcuso que los servidores públicos que fueron contemplados en ella, deben ser protegidos por el derecho administrativo, ya que el legislador local no puede alterar el contenido ni naturaleza de la misma.

Por otra parte, de la sola lectura que se realiza a la legislación Estatal vigente, es **palmario** que el contenido del artículo 35, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, al establecer que los integrantes de las corporaciones policiales estatales y municipales de seguridad pública o sus beneficiarios en su caso, tendrán derecho al otorgamiento de pensiones por retiro, retiro anticipado, invalidez, vejez, orfandad y muerte, no se contrapone a la determinación antes propuesta, en virtud de que como ya se precisó con anterioridad, el numeral 2º, del mismo ordenamiento legal estatal, establece que las instituciones de seguridad pública son también las instituciones de Procuración de Justicia, entre otras.

Lo anterior encuentra apoyo en el criterio jurisprudencial que a continuación se inserta:

"SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER QUE LAS RELACIONES JURÍDICAS DE LOS SECRETARIOS Y ACTUARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO SE

REGIRÁN POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES INCONSTITUCIONAL.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 89/2016 (10a.), interpretó el precepto constitucional referido y sostuvo que el régimen de exclusión que contiene rige únicamente para los servidores públicos que limitativamente han sido mencionados en esa fracción, a saber: militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, quienes se regirán por sus propias leyes, y concluyó que no incluye a los secretarios y actuarios del Ministerio Público, ya que su relación con el Estado es de naturaleza laboral. Por tanto, el artículo 4o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco que los considera como sujetos de exclusión, es inconstitucional, toda vez que viola los regímenes jurídicos regulados por el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por rebasar el aludido catálogo restrictivo inmerso en su fracción XIII, al no estar contemplados expresamente y, por ende, su relación con el Estado es de naturaleza laboral, independientemente de la función que desempeñen dentro de la estructura orgánica de la institución del Ministerio Público. Luego, si el legislador ordinario desatendió dicho catálogo excluyente, extendiéndolo a otros trabajadores al servicio del Estado, inobservó la exigencia del principio de supremacía constitucional, como norma directiva fundamental a seguir para la realización de los valores constitucionales.”¹

Bajo ese contexto, esta Sala valora las pruebas allegadas por las partes conforme a lo dispuesto por el artículo 96, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, las cuales consisten en las siguientes documentales:

- Original de la solicitud de pensión por retiro anticipado dirigida a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa el quince de enero de dos mil veinte (*foja 14-19*).
- Copia certificada por la autoridad demandada de la hoja de servicio expedida por Jefe del Departamento de Reclutamiento, Selección y Desarrollo Personal y Encargado del Archivo de Expedientes de Personal, de la Dirección de Recursos Humanos (*foja 69*).
- Copia certificada por la autoridad demandada del acta de nacimiento de la parte actora, de los cheques de pagos de las quincenas de diciembre del dos mil nueve, del último cheque de apoyo de trabajo a nombre de la parte actora con folio [REDACTED], CURP a nombre del accionante (*foja 71-77*).

¹ Décima Época Registro: 2014591 Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo III Materia(s): Constitucional, Laboral Tesis: PC.III.A. J/25 A (10a.) Página: 2372.

- Originales de los oficios *** y ***, emitidos el veintinueve de febrero de dos mil veinte y dos de marzo de dos mil veinte, por el **Oficial Mayor y el Dirección General Jurídica ambos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa** (foja 29 -31).

Las cuales adquieren valor probatorio pleno, al haber sido ofrecidas en original y copias certificadas, de conformidad con el artículo 89 fracción I de la ley que rige nuestro procedimiento.

En ese sentido, dichas probanza demuestran lo siguiente:

- *** laboró como Agente del Ministerio Publico "A", adscrito a la Agencia de Ministerios Públicos (Culiacán).
- El promovente cuenta con una antigüedad de prestación de labores como Agente del Ministerio Publico "A" de veintiún años, un mes y veintitrés días; y que este a su vez, causó baja el treinta de abril del dos mil diecinueve.
- Que el accionante cotiza mediante la deducción "CUOTA IPES" de conformidad con lo previsto en la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa.
- Que las autoridades demandadas al momento de emitir su resolución negaron lo solicitado fundamentando su actuar de conformidad en el artículo 35 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Precisado lo anterior, tomando en consideración el contenido del artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, y que de las probanzas allegadas a juicio queda acreditado que el accionante, a la fecha de la presentación de la demanda cumplía con los requisitos que tal precepto establece para poder acceder a la pensión por retiro anticipado, no obstante, la parte actora aduce que cuenta con veintidós años de servicio como "Agente del Ministerio Público", lo cual es incorrecto, ya que cuenta con una antigüedad de veintiún años, un mes y veintitrés días laborados, misma que se corrobora de la constancia de servicios del actor, visible en la foja sesenta y nueve de los presentes autos y valorada previamente en la presente resolución.

Por lo que, el análisis anterior es suficiente para declarar la nulidad de los oficio [REDACTED] de veintinueve de febrero de dos mil veinte y [REDACTED] de dos marzo de dos mil veinte, en consideración de que la parte actora tiene derecho a que se le otorgue su pensión por retiro, conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en el artículo 38 del citado ordenamiento legal, esto en virtud, de que contraviene los derechos que goza el particular, tomando en consideración que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, el demandante tiene derecho al otorgamiento de la pensión solicitada.

Asimismo, no pasa desapercibido para esta Sala la manifestación de la autoridad demandada en cuanto que el actor se encuentra registrado en el sistema de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, y que por ello le fueron realizadas las retenciones por concepto de "CUOTA IPES"; sin embargo, dicho argumento se desestima, atendiendo a los fundamentos legales conforme a los cuales debe ser otorgada la pensión por retiro anticipado a ***.

Cabe destacar que el hecho de que la autoridad demandada realizara la retención en comento, no puede ser imputable al demandante, ni tampoco un impedimento para que éste acceda a su derecho a la pensión conforme al sistema que le corresponde, a saber, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, pues tal y como se aprecia de la "constancia de servicio", valorada en párrafos anteriores se tiene que del dieciséis de enero de dos mil tres hasta treinta de abril de dos mil diecinueve, se ha desempeñado con la categoría de Agente de Ministerio Público "A", mismo que corresponde al régimen especial que contempla el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la constitución federal.

Por lo tanto, la parte actora no debió ser sujeto a la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, y por ende, considerado como trabajador en transición al momento de su entrada en vigor de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, pues es inconcuso que se encuentra sujeto a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo a la naturaleza de la función que desempeña y a los preceptos legales que rigen la figura jurídica de la pensión para los agentes del ministerio publico.

En razón de lo anteriormente expuesto, **al actualizarse la causa de nulidad prevista por el artículo 97, fracción IV, de la Ley de**

Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa; al haberse transgredido en perjuicio de la demandante las disposiciones legales aplicables en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en cuanto al fondo del asunto; por tanto, **resulta procedente declarar la nulidad de las resoluciones que por esta vía se combate**, de conformidad con el numeral 95, fracción II de la Ley que rige este procedimiento jurisdiccional.

Cuarto. Condena. Tomando en cuenta la nulidad decretada en el considerando anterior, esta Sala se pronuncia respecto a los términos en que deberá darse el cumplimiento al presente fallo:

Al resultar procedente lo solicitado por la parte actora, toda vez que tiene derecho a la pensión por retiro anticipado, de conformidad con el artículo 40, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa; en ese sentido, **se condena a la autoridad demandada Fiscal General del Estado de Sinaloa**, a que una vez haya causado ejecutoria la presente resolución, dé trámite a la solicitud de pensión por retiro anticipado de la parte actora, a la cual le corresponde el pago de dicha pensión por el ochenta por ciento, esto de conformidad con los artículos 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Por otra parte, cabe precisarse que el cumplimiento de la sentencia que se dicta, se deberá de realizar por medio de las autoridades que estén obligadas conforme a sus atribuciones y facultades, aún y cuando no hayan sido señaladas como demandadas en el presente juicio.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de

dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.²

(Énfasis añadido por la Sala).

En ese contexto, tanto el **Fiscal General del Estado de Sinaloa**, el **Oficial Mayor** como el **Director General Jurídico** ambos adscritos a la **citada Fiscalía**, autoridades demandadas en el presente juicio, una vez que la presente resolución haya causado ejecutoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, deberán informar sobre el cumplimiento total y cabal que hayan otorgado respecto de la sentencia de marras, debiendo efectuar todas las diligencias necesarias para su debido cumplimiento.

Conforme a lo anteriormente razonado, y atento a lo dispuesto por los artículos 95, fracciones II, V y VI; 96, fracción VI, y 97, fracción IV, todos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, se:

RESUELVE

I. La parte actora acreditó su pretensión, por lo tanto;

II. Se declara la **nulidad** de todos y cada uno de los actos impugnados por la parte actora, actos atribuidos a la autoridad demanda señalada en el resultando antes dicho, según lo analizado en el considerando **tercero** de la presente resolución.

III. Una vez que haya causado ejecutoria la presente sentencia en los términos del artículo 101 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, las autoridades demandadas deberán informar a esta Sala sobre el cumplimiento de la misma, conforme a lo establecido en el considerando **cuarto**, apercibida en los términos del artículo 103 de la ley en cita, en caso de incumplimiento.

² Novena Época Registro: 172605 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 2007, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 57/2007 Página: 144.

Sala Regional Zona Centro
Expediente: 525/2020-II
Actor: *.**

IV. Esta sentencia no es definitiva ya que en su contra es procedente el Recurso de Revisión a que se refiere el artículo 112, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa.

V. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

VI. Notifíquese y cúmplase.

Así lo proveyó y firmó la Magistrada Instructora de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, Edna Liyian Aguilar Olguín, en unión de la Secretaria de Acuerdos Isbel Herminia Ortega Galaviz, que actúa y da fe.

JLMI.

Isbel Herminia Ortega Galaviz
Secretaria de Acuerdos

Edna Liyian Aguilar Olguín
Magistrada Instructora de la Sala
Regional Zona Centro

ELIMINADO. Corresponde a datos personales de las partes del juicio. Fundamento legal: artículos 3 fracción XXVI, 149, 155 fracción III, 156 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con los numerales Trigésimo Octavo fracción I, Quincuagésimo Segundo párrafo segundo, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Noveno, Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.